

Soberanía alimentaria versus negocios transgénicos

Biodiversidad (*)

En paralelo a la octava Reunión de los países signatarios del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP 8), de la tercera Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena y de la conferencia de la FAO sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, movimientos sociales e indígenas que resisten el modelo de privatización de la naturaleza, la biodiversidad y la vida, realizaron actividades y movilizaciones en defensa de sus conocimientos tradicionales y sus formas de vida.



Los resultados de la tercera Reunión de los países signatarios del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (MOP 3) llevada a cabo en Curitiba, Brasil, entre el 13 y el 17 de marzo fueron “decepcionantes” según describió Paul Nicholson, de Vía Campesina, en entrevista con Radio Mundo Real.

En la MOP 3 se evidenciaron todas las fallas de este tipo de reuniones donde centenas de delegados discuten los derechos de millones de personas. Según Nicholson “el proceso del debate ha sido pobre, la

(*) En base a Radio Mundo Real que realizó una extensa e intensa cobertura de las reuniones desarrolladas en Curitiba, con énfasis en las actividades desarrolladas por las organizaciones y movimientos sociales allí presentes. Se puede acceder a estos materiales ingresando a la página web www.radiomundoreal.fm, en la sección “No privatizar la biodiversidad”.

metodología es agotadora, no facilita la participación social, y lo que se está jugando es mucho, nada menos que la privatización de la vida y los recursos naturales. Y los gobiernos muy débiles, muy presionados por las multinacionales, no queriendo luchar en favor de las futuras generaciones”.

Con relación a la reciente Conferencia sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se llevó a cabo en Porto Alegre del 7 al 10 de marzo, el dirigente campesino manifestó que “fueron las movilizaciones de afuera las que transformaron todo lo que ocurrió dentro”, en el sentido de que en la propia declaración final de esta conferencia “se rescatan conceptos como los de soberanía alimentaria y territorio, de los derechos de las comunidades pesque-

ras y de los pueblos nómadas e indígenas”.

Las acciones de Vía Campesina en Porto Alegre en paralelo a la Conferencia de la FAO a las que se refiere Paul Nicholson, incluyeron el ingreso en dos oportunidades de grandes delegaciones de campesinos de todo el mundo al local donde se desarrolló la Conferencia, la ocupación de un predio de la empresa Aracruz Celulosa el día internacional de la mujer por parte de campesinas y agricultoras, y actividades de debate y coordinación internacional para las campañas que Vía Campesina lleva a cabo este año.

“Nosotros valoramos que los gobiernos en la FAO comienzan a oír y también a escuchar por primera vez” expresó el dirigente campesino, en el sentido de que están incorporando las demandas de los agricultores.

Para Nicholson, el lado negativo de este cambio que está experimentando el debate sobre reforma agraria a nivel de la FAO y de algunos gobiernos es que no se dan “recursos, medios y fuerzas políticas” para una verdadera transformación de la tenencia de la tierra en el mundo.

Finalmente, con relación a las negociaciones que tienen lugar en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Nicholson manifestó que el proceso está “en la recta final y los plazos se acaban”.

“Si la OMC no finaliza un acuerdo para el mes de julio se le cae al suelo todo lo que avanzó desde Hong Kong. Es importantísima la movilización en este contexto. En Vía Campesina creemos que ahora será importante la movilización en los países, y hay que presionar gobiernos clave, como el de Brasil, como el de India, como el de Indonesia, para que tomen posturas mucho más fuertes frente al chantaje y la presión de Estados Unidos y la Unión Europea”.

La campaña de movilizaciones que llevará a cabo Vía Campesina, comenzará a intensificarse a partir de mayo, y según Nicholson, en el movimiento campesino se tienen muchas expectativas de lograr el objetivo de sacar la agricultura de la OMC y descarrilar las negociaciones del mal llamado “libre comercio”.

“Nosotros creemos que tenemos posibilidades de frenar esta ronda, que la podemos descarrilar, y en las negociaciones de Ginebra nos vamos a movilizar allí pero también en muchos países. Por eso es importante consolidar las alianzas con otros movimientos como el ambientalista”.

En Curitiba, en el marco de la octava Reunión de los países Parte del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP 8) realizada del 20 al 31 de marzo de 2006, se realizó una jornada de acción contra las semillas Terminator, que contó con la participación de unos 300 campesinos de Vía Campesina Brasil y de organizaciones y movimientos agrarios de diversas partes del mundo.

En el marco del Convenio de Diversidad Biológica existe una moratoria de este tipo de semillas desde el año 2000. Lo que se pensó en ese momento fue precisamente en los impactos socioeconómicos y sobre la biodiversidad que tendrían la liberalización masiva de este tipo de semillas.

Por intermedio de esta moratoria se recomendó a los gobiernos que prohibieran la producción y comercialización de las semillas Terminator, “inclusive las pruebas de campo”, explicó Silvia Ribeiro, del ETC Group.

Las presiones para acabar con la moratoria comenzaron aproximadamente hace un año y medio, y la forma que utilizaron las empresas por intermedio de los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda fue la de generar una propuesta sumamente confusa contra el principio de precaución solicitando que las prohibiciones se estudiaran “caso a caso”. “No existe ningún caso en que Terminator sea bueno, eso es una trampa”, afirmó Ribeiro.

La especialista puso como ejemplo lo que pasaría en países agrícolas si se liberaran las semillas Terminator. “En Brasil, que es uno de los países que produce más soja del mundo, el 87 por ciento de los productores no compra semillas, sino que guardan sus propias semillas. Si la tuvieran que comprar eso equivaldría automáticamente a 550 millones de dólares anualmente de ganancia para las empresas”.

Con relación a la reunión del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (MOP 3), Ribeiro afirmó que no se avanzó hacia garantizar la bioseguridad sino todo lo contrario. “En esta MOP 3 fue impresionante ver que aquellos países que han firmado tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, y que eran países que antes se caracterizaban por su defensa de la bioseguridad, ahora directamente estaban apoyando los intereses de las empresas transnacionales y de Estados Unidos” ●



Con Elizabeth Bravo de Acción Ecológica/Ecuador

“La COP se ha convertido en un mecanismo de privatización de la vida”

—¿Qué se aprobó en la MOP?

—Bueno, en la MOP hubo 19 decisiones, sobre temas como la evaluación de riesgos, la responsabilidad civil, el cumplimiento de países que son parte de la MOP, pero uno de los puntos más controversiales fue el que tuvo relación con la documentación que tiene que acompañar a las exportaciones de transgénicos que son destinados para uso en alimentación, procesamiento animal y procesamiento.

En ese sentido, hubo bastante oposición de algunos países que son exportadores de soya y de granos en general, destacándose por ejemplo el caso de Paraguay, que estuvo constantemente bloqueando las decisiones, y el caso de México, que aunque no es exportador de granos, tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Lo que se obtuvo fue una declaración de consenso bastante débil. La cuestión discutida es si la documentación deberá tener una cosa que diga “contiene” o “puede contener” transgénicos. Se decidió que la documentación sea “puede contener” transgénicos, pero con un lenguaje que quedó bastante diluido, y además se puso una cláusula muy importante que dice que los países pueden establecer convenios bilaterales que cumplan con los “objetivos del Protocolo (de Cartagena), no con lo que se decidió (en la MOP3); y por otra parte se hace una exclusión al comercio con países que no son parte del Convenio, básicamente Estados Unidos en este caso. Entonces esto deja expuestos a muchos países que tienen convenios bilaterales con los EEUU, que son una buena parte de los países de América Latina.

—¿Qué implicancias piensas que tiene esto para la agricultura campesina?

—Para la agricultura campesina, no sólo la decisión de la MOP sino todo el paquete, significa que vamos a empezar a recibir cargas de maíz y soya transgénica con precios subsidiados, sin ningún tipo de control, y los campesinos y algunos países, por ejemplo el Ecuador, que todavía somos autosuficientes en maíz, no van a poder competir con los precios de los Estados Unidos, van a quebrar, y además vamos a tener transgénicos. Pueden desencadenarse cosas como contaminación genética y otras cosas que ya hemos visto en México.

—¿Puedes hablarnos del concepto de “identidad preservada” que se manejó en la MOP? ¿Qué significa?

—Una de las cosas que se decidió ahí fue que se utilicen métodos de identidad preservada, que es un seguimiento de los granos o de los alimentos desde el productor; algunos países ricos hacen esto, hacen contacto directamente con los productores, ahí hacen un chequeo para ver si es transgénico, luego hacen un segundo chequeo en el puerto de embarque, y luego en el puerto de desembarque. Y una vez asegurado que la soya o el maíz no es transgénico, hacen todo un seguimiento hasta el consumidor final.

Ahora, según decía Silvia Ribeiro, el concepto de identidad preservada puede tener, además de este impacto, otro que para mí es también elitista, porque quienes pueden tener eso son los países ricos, y dentro de los países ricos, quienes van a poder acceder a productos libres de transgénicos son los que tienen más plata.

—¿Y qué papel jugaron los gobiernos de los países de América Latina?

—Bueno, el papel que jugaron los países de América Latina fue bastante lamentable. Sobre todo un grupo de países, funcional a los intereses de Estados Unidos, estuvo bloqueando las negociaciones. Especialmente aquellos que tienen Tratados de Libre Comercio, como México, Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Por otro lado estuvieron los países exportadores de transgénicos, que estuvieron representados por el gobierno de Paraguay.



Hay varias cosas en juego. Lamentablemente la mayor parte de la discusión de las ONG está siguiendo la cuestión de acceso a los recursos genéticos y los derechos de las poblaciones indígenas, que es una forma de cómo privatizar la biodiversidad, de cómo privatizar los genes. Porque en lo que se ha convertido la COP es un mecanismo de privatización de la vida, en sus diferentes componentes.

Lo que tiene que ver con acceso a recursos genéticos es la privatización de los genes y el resto, o gran parte del resto, se refiere a la privatización de los ecosistemas, a través de las áreas protegidas, o, por ejemplo, a través de los grupos de trabajo sobre océanos, sobre aguas territoriales; en todas existen componentes que permiten las asociaciones público-privadas, que entregan a esas organizaciones el control y el manejo de extensas zonas de territorio.

Precisamente, el Convenio en Biodiversidad ha hecho un estudio sobre las asociaciones público-privadas en materia de áreas protegidas. Tenemos por ejemplo a Shell como una socia en Nigeria promoviendo el “desarrollo sustentable” de las poblaciones que viven en áreas protegidas; precisamente en Nigeria, donde un grupo de nueve activistas fueron ejecutados extrajudicialmente por oponerse a Shell.

En Camerún está ExxonMóvil, la empresa que está construyendo un oleoducto que viene desde Chad y atraviesa todo Camerún, y el tipo de asociación que se hace es ayudando a desarrollar una normativa, o sea a escribir las leyes, para que las comunidades tengan un “desarrollo sustentable”, para que aprendan a vivir “sustentablemente”.

Es realmente una tomadura de pelo y una grosería este tipo de cosas.

En base a entrevistas de Acción por la Biodiversidad y RadioMundoReal

Por una América Latina Libre de Transgénicos

En el Foro de la Sociedad Civil, que se realizó en paralelo a la octava reunión de los países parte del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP 8) en Curitiba, Brasil, se reunieron movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de la biodiversidad. Fue en el marco de este Foro que tuvo lugar, los días 17 y 18 de marzo, la Asamblea General de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT).

La RALLT nació inspirada en la necesidad de las comunidades de desarrollar estrategias globales para hacer frente a la introducción de organismos transgénicos y prevenir nuevas introducciones en la región, apoyando procesos nacionales bajo el principio de la soberanía alimentaria.

El primer día de la Asamblea, por la mañana, se presentaron los correspondientes informes regionales. Álvaro Salgado presentó el caso de México, Isaac Rojas el de Centro América y Adolfo Boy el del Cono Sur.

Germán Vélez dio a conocer el informe sobre la Región Andina haciendo hincapié en la incidencia que en esta región han tenido los Tratados de Libre Comercio. Estos han conducido a una cada vez mayor liberalización en el comercio beneficiando fundamentalmente a las transnacionales y a otros actores económicos dominantes, y destruyendo a gran escala los sustentos en las áreas rurales con sus consabidas consecuencias. La mitad de la población mundial trabaja en el sector agrícola de base campesina y muchas otras personas dependen de él. Organizaciones como la ecuatoriana Acción Ecológica han alertado que el ingreso de productos estadounidenses, en el marco de las negociaciones sobre agricultura en el Tratado de Libre Comercio (TLC), significaría "una puerta abierta" a los transgénicos.

En la segunda parte de la mañana del 17 de marzo, se abordaron de manera especial algunos temas. Silvia Ribeiro, del ETC Group, se refirió a la Tecnología Terminator.

Por su parte María Isabel Manzur se refirió a los "pharmacrops" (cultivos genéticamente modificados para producir fármacos) y Elizabeth Bravo, integrante de Acción Ecológica de Ecuador, sobre el Protocolo de Bioseguridad.

Talleres

En la tarde se trabajó en la modalidad de talleres con la conformación de cuatro grupos. El que abordó la región Andina concluyó en la necesidad de trabajar a nivel del Parlamento Andino a fin de conseguir que esa región sea declarada libre de papas genéticamente modificadas. Para ello se comprometió a preparar un documento y a organizar un encuentro en Chiloé, uno de los centros de origen de este tubérculo.

El grupo del Cono Sur se centró en el tema soja y definió la preparación de una contraconferencia para el próximo mes de junio, cuando la Coalición de Agronegocios se reúna en Buenos Aires. El grupo desarrolló algunas ideas para trabajar con quienes han sido afectados por la expansión de la soja RR (Roundup Ready, desarrollada por Monsanto).

En cuanto al maíz, se decidió trabajar en la instauración de zonas libres de variedades transgénicas, y hacer hincapié en la cultura milenaria que acompaña este cultivo. También realizar intercambios sobre esta problemática en los países del Sur.

En cuanto a la Tecnología Terminator, la discusión estuvo centrada en la necesidad de realizar un trabajo a nivel nacional, alertando a las poblaciones locales sobre del tema. Para lograr esto, se subrayó la necesidad de producir material impreso y de radio.

El futuro de la RALLT

Todas las discusiones del día 18 giraron en torno a la viabilidad económica de las campañas, ya que la Red dispone de contados recursos. Algunos de los puntos alcanzados estuvieron focalizados en la necesidad de conformar algunos centros locales que puedan hablar en nombre de la Red; para ello se discutió cómo deberían tomarse las decisiones, quiénes pueden ser miembros y cuál sería el proceso de admisión; esto, a fin de consolidar una estructura transparente. En este contexto se vio pertinente reelaborar la declaración de principios de la Red.

También se consideró fundamental coordinar acciones con movimientos sociales tales como Vía Campesina y la conformación de un nuevo grupo que trabaje en los aspectos jurídicos, esenciales a fin de establecer una legislación fuerte contra el *dumping* y los alimentos transgénicos. En lo jurídico se debe apuntar a que los gobiernos tengan el derecho a controlar y detener las importaciones de alimentos para poder estabilizar sus mercados internos.

También se había señalado, por parte de la Vía Campesina, la necesidad de una Declaración Internacional sobre los Derechos Campesinos y el establecimiento de tratados internacionales que controlen la oferta de productos a nivel internacional y que garanticen precios justos a los productores campesinos para sus principales exportaciones.